



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**

<b>REFERENCIA:</b>	<b>SENTENCIA – APELACIÓN</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>ADRIANA MARIA PINILLO - HEREDEROS</b>
<b>DEMANDADOS:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>RADICADO:</b>	<b>050013105 009 2015 1529 01</b>
<b>ACTA N°:</b>	<b>93</b>

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por ADRIANA MARÍA PINILLO en contra de COLPENSIONES, para pronunciarse en virtud del recurso de apelación interpuesto por la activa frente a la sentencia con la cual el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 93** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

## **1. ANTECEDENTES**

### **1.1. LA DEMANDA<sup>1</sup>**

Con este proceso se pretende se CONDENE a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a ADRIANA MARÍA PINILLO, desde la fecha en que le fue suspendida, en la cuantía que le corresponde teniendo en cuenta el derecho de los menores KELY JOHANA y JEISON DUVAN ALVAREZ PINILLO, incluso el momento en que les feneció el derecho a cada uno de los jóvenes, con intereses moratorios, indexación y costas procesales.

Para sustentar sus pretensiones afirmó en síntesis que: **i)** ADRIANA MARÍA PINILLO convivió con JORGE ELIECER ÁLVAREZ RUEDAD en calidad de compañeros permanentes por

---

<sup>1</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 1 EXPEDIENTE- páginas 2-15

espacio superior a 6 años, de manera continua e ininterrumpidamente y hasta el momento de la muerte, compartiendo lecho, mesa y techo. Se tenían cariño, amor y se regían bajo el auxilio mutuo, siempre lucharon por mantener su vínculo y la demandante dependía económicamente en un todo de su compañero. **ii)** Solicitó la pensión de sobrevivientes a nombre propio y de sus dos hijos menores KELY JOHANA y JEISON DUVAN ALVAREZ PINILLO, que les fue reconocida por el I.S.S. con Resolución 776 del 12 de marzo de 1993. Con Resolución 8632 de 1994 se ordenó la suspensión de la pensión a ADRIANA MARÍA PINILLO y al menor DUVAN ALVAREZ, y con la Resolución 13804 de 1994 finalmente se decide continuar concediendo la pensión a los dos menores. **iii)** ADRIANA MARÍA PINILLO solicitó nuevamente la pensión, lo que fue resuelto negativamente con Resolución 26353 de 2006, argumentando ausencia de convivencia entre los compañeros. **iv)** Finalmente se afirma que para el momento en que se instaura la demanda ha fenecido el derecho de los hijos, por no ser discapacitados y ser mayores de edad.

## 1.2. LA CONTESTACIÓN DE COLPENSIONES<sup>2</sup>

La entidad se opuso a las pretensiones de ADRIANA MARÍA PINILLO señalando que no acredita convivencia con el causante dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su deceso, como estipula el artículo 20 y subsiguientes del Decreto 3041 de 1966.

## 2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del **17 de septiembre de 2019** el Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín decidió ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por ADRIANA MARÍA PINILLO RODRIGUEZ quien falleció el 1 de mayo de 2017 y le sucedieron sus hijos, KELY JOHANA y JEISON DUVAN ALVAREZ PINILLO <sup>3</sup>

En relación con la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, el Aquo analizó el derecho a la luz del **Decreto 758 de 1990** y de manera concreto, sobre lo dispuesto en el **artículo 29**, señalando que, de acuerdo a lo previsto en esa norma, se desplaza la exigencia de los 3 años de convivencia hasta el momento de la muerte, siempre y cuando se verificara que dentro de ese interregno se hubiesen procreado hijos. Así, resalta que como la muerte acaeció el **1 de abril de 1990** y los hijos de la pareja nacieron el **30 de junio de 1985** y el **30 de junio de 1986**, tiene que acreditarse convivencia de 3 años anteriores al hecho de la muerte. Y tras analizar el acervo probatorio, concluye que tal exigencia no se demuestra en el proceso, que para el

<sup>2</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 1 EXPEDIENTE - páginas 73 - 74

<sup>3</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 1 EXPEDIENTE- páginas 69 -70

momento de la muerte la pareja no estaba haciendo vida en común. Hace énfasis en la petición radicada por ADRIANA MARÍA PINILLO con el fin de que se reanudara el reconocimiento de la pensión que le hubiere sido suspendida, señalando que en aquella oportunidad ésta confesó que se habían separado 8 días antes de la muerte sin acreditar en el proceso cuáles fueron los motivos de esa separación, pero como confiesa que fue ella la que se retiró del hogar por razones de conflicto con su suegra, lo que no fue demostrado al interior del proceso, tan poco resulta procedente dar aplicación al precedente jurisprudencial en sentencia **SL 13368 de 2014**

### **3. EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA ACTIVA**

Contra esta decisión y análisis, la apoderada solicita se revoque la sentencia en su integridad y se acceda a las pretensiones a favor de la masa sucesoral de la señora **ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ**, planteando básicamente los siguientes argumentos: **i)** En primer lugar, se aparta de la interpretación que se da a la norma en relación con las exigencias de la compañera, señalando que el Juez hace extensiva la interpretación del artículo 46 de la Ley 100 a la norma que regula el derecho en el decreto 758 de 1990 y en el artículo 55 de la ley 90 de 1946, normas en las que se debe efectuar una interpretación que es disyuntiva, para señalar que el derecho se acredita con la existencia de los hijos. **ii)** De otro lado, cuestiona la valoración que se efectuó al acervo probatorio, en especial al documento en el que la señora ADRIANA MARÍA PINILLO afirmó la existencia de una separación 8 días antes de la muerte señalando que la confesión es indivisible por lo que deben tenerse en cuenta las aclaraciones y explicaciones, y relata que en los términos de la sentencia SL 368 de 2014, una separación de 8 días no es tiempo suficiente para indicar que hubo ruptura entre una pareja que venía conviviendo de manera continua y permanente por 6 años y con unos hijos de 4 y 5 años, conforme lo acreditado con las testigos que manifiestan espontáneamente que tuvieron conocimiento de la convivencia de la pareja. **iii)** Aduce que en los términos del Decreto 758 de 1990, en el proceso tampoco se acredita la pérdida del derecho por fraude ni se demostró que esa hubiese sido la causal para revocar el acto administrativo, resaltando que se trató de una revocatoria ilegal, no se acreditan los postulados para la revocatoria directa del acto administrativo. **iv)** Finalmente, aduce que teniendo en cuenta que la entidad demandada no tenía argumentos válidos ni jurídicos para revocar la prestación económica reconocida, se debe condenar a intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de ley 100 de 1993, atendiendo a su finalidad.

#### 4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para alegar en esta instancia, solo intervino la apoderada de **COLPENSIONES** que solicita se **CONFIRME la decisión absolutoria** argumentando, en síntesis: **i)** Señala que conforme a la fecha del deceso del señor JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ RUEDA el 01 de abril de 1990, se deben analizar la siguiente normativa: artículo 55 de la Ley 90 de 1946, artículo 20 y 21 del Decreto 3041 de 1966 y artículos 27, 29 y 30 del Decreto 758 de 1990. Dice que conforme lo analizado en el expediente y de acuerdo con el material allegado, se logró demostrar por la parte demandante una convivencia con el causante y que al momento de su fallecimiento no convivían juntos, situación que fue afirmada por la actora al hacer la reclamación administrativa, señalando que las testigos no dieron claridad en sus respectivas declaraciones frente a los hechos materia del litigio. **ii)** La vocación de la prestación reclamada es conceder un amparo, mediante la pensión de sobrevivientes a quien reivindica el derecho y demuestre merezca esa protección, en cuanto forma parte de la familia del causante. En el presente caso, debe tenerse en cuenta que pasaron aproximadamente 20 años desde la expedición de los actos administrativos para que la actora demandara el reconocimiento prestacional, con lo que se refuerza el presupuesto de que no cumplía con los requisitos exigidos por la normatividad entonces vigente. **iii)** Aduce que ante la clara manifestación de la demandante que se encontraba separada del causante al momento de su fallecimiento, actualmente no existe obligación de COLPENSIONES E.I.C.E. de reconocer la pensión, a la demandante le correspondía demostrar las circunstancias de hecho y de derecho que llevaran a la conclusión de la efectiva convivencia con el causante, no obstante, la entidad reconoció el 100% a los hijos en común.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación por lo que el análisis se efectuará en el siguiente orden lógico: **i)** Al haber ocurrido el hecho del fallecimiento el **1 de abril de 1990**, se analizará en primer lugar, el presupuesto normativo y jurisprudencial sobre los requisitos en relación con el derecho de la compañera permanente como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, para verificar si la señora ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ acreditó tal calidad para así, condenar a COLPENSIONES a reconocer en favor de sus herederos, el retroactivo no prescrito de las mesadas pensionales. **ii)** Se verificará si en este caso se acreditan los presupuestos para condenar al pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 o subsidiariamente, la indexación.

**5. SE ACREDITA EN EL PROCESO LA CALIDAD DE BENEFICIARIA DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES DE LA SEÑORA ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ COMO COMPAÑERA PERMANENTE DEL CAUSANTE FALLECIDO EL 1 DE ABRIL DE 1990**

Sea lo primero señalar que atendiendo a la fecha del fallecimiento del señor JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA el 1 de abril de 1990<sup>4</sup>, no se ha debido aplicar por el A quo la normativa consagrada en el Decreto 758 de 1990 cuya vigencia comenzó con posterioridad, el **11 de abril de 1990**.

Para la época de la muerte del afiliado al Instituto de Seguros Sociales, como la de este asunto, desde la Ley 90 de 1946 existió en favor de la compañera permanente el derecho a la pensión de "viudedad", denominada después "de sobrevivientes" en el **artículo 55** de la **Ley 90 de 1946**, que es del siguiente tenor: :

Para los efectos del artículo anterior, los ascendientes legítimos y naturales del asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los requisitos exigidos en su caso; ya a falta de viuda, será tenida como tal **la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato**; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, sólo tendrán un derecho proporcional las que tuvieron hijos del difunto.

Sobre esta disposición, las Altas Cortes se han pronunciado en relación con varios aspectos:

En **primer lugar**, si bien el artículo fue consagrado para las pensiones por accidente o enfermedad profesional, resulta aplicable en virtud de lo dispuesto en el **artículo 62<sup>5</sup>** de

<sup>4</sup> CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 1 EXPEDIENTE – página 29

<sup>5</sup> **Artículo 62:** <Apartes tachados INEXEQUIBLES> A las pensiones de viudedad y orfandad les será aplicable la disposición del artículo 55. El derecho a estas pensiones empezará desde el día del fallecimiento del asegurado y cesará con la muerte del beneficiario, sin acrecer las cuotas de los demás, ~~o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias~~, reciba de otra persona lo necesario para su subsistencia, o cuando el huérfano cumpla catorce (14) años de edad o deje de ser inválido. ~~Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida.~~

Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-568-16 de 19 de octubre de 2016, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo. Ordena la Corte:

*'Las viudas y viudos que con posterioridad al siete (7) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991) hubieren contraído nuevas nupcias y por este motivo, perdieron el derecho a la pensión de que trata el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar a las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.'*

la misma ley, a las **pensiones por muerte común**; debiendo destacar que tales disposiciones no fueron modificadas por el Acuerdo 224/1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, ni derogadas por el Decreto 433/1971.

En la sentencia **SL 4200 – 2016**, la Sala de Casación Laboral evidencia el entendimiento que la alta corporación ha mantenido sobre la interpretación de esta norma:

“Sobre este tema la Sala en sentencia CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 31613, reiterada en CSJ SL, 25 mar. 2009, rad. 34401; CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 37552; y CSJ SL, 24 sep. 2014, rad. 42102, se pronunció en los términos que siguen:

Ahora bien, un examen contextualizado de la normatividad de la Ley 90 de 1946 que dejó subsistente el Decreto Ley 433 de 1971, en punto a los beneficiarios de la pensión lleva a concluir que el derecho de la entonces concubina, hoy llamada compañera permanente, mantenía para 1983 el carácter supletorio que respecto de las pensiones de sobrevivientes por riesgos profesionales tenía dispuesto el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, extendido a las pensiones de vejez por expresa remisión del artículo 62 de esta ley, no derogado por el Decreto 433 de 1971.

(...)

Como lo anotó la Corte en el **fallo del 17 de junio de 1998, radicación 10634**, que el Tribunal trae a colación en apoyo de su conclusión y que explícitamente se refiere al **artículo 55, pero de la Ley 90 de 1946**, parcialmente declarado inexecutable en fallo del 9 de septiembre de 1998, **el derecho de la compañera de un afiliado** que hubiere fallecido como consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, estuvo sometido a tres condiciones: **1) Que no hubiere dejado cónyuge supérstite; 2) Que el de cujus y su derechohabiente se mantuvieran solteros durante el concubinato; y 3) Que la reclamante hubiera hecho vida marital, durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero, a menos que hubieran procreado hijos comunes.** Esa regla jurídica no fue modificada por el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de ese año”.

En **segundo lugar**, la exigencia de que el causante y su derechohabiente se mantuvieran solteros durante el “concubinato” fue declarada inexecutable mediante sentencia **C-482/98**, con la siguiente aclaración: *“Las personas que, con posterioridad al siete de julio de 1991 no hubieren podido sustituirse en la pensión del fallecido, por causa de la aplicación del texto legal que ha sido declarado inconstitucional, podrán, a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes el reconocimiento de su derecho a la sustitución pensional”*.

Finalmente, sobre la interpretación que se ha dado en relación con la exigencia consagrada en el **artículo 55 de la Ley 90 de 1946**, a la acreditación de haber hecho vida marital durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero **a menos que hubieran procreado hijos comunes**, no han sido pocos los pronunciamientos de la Sala de casación laboral en sentencias como la **CSJ SL, del 7 de julio de 2009, radicación 25920** y **CSJ SL del 24 de septiembre de 2014 radicación 42101** resaltados en



la **CSJ 1131-2015**; aspecto sobre el que se precisó el alcance recientemente en la sentencia **SL1060-2023**, en los siguientes términos:

Conforme a los criterios jurisprudenciales transcritos y una lectura sistemática y teleológica de la norma en cuestión, particularmente del apartado que funda la tesis de la recurrente: *«será tomada como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos»*, deberá decirse que el carácter disyuntivo, en apariencia, formulado por la conjunción «**o**» en la preceptiva normativa, más que una alternancia de preferencia de una de las dos circunstancias sobre la otra, es decir, que el requisito de la procreación de hijos se imponga preferencialmente sobre el de la convivencia en los últimos tres años, lo que se vislumbra es que la procreación de hijos se establece como un *«plus modulativo»* de la convivencia, esto al tenerse en cuenta que en algunos casos -la convivencia- puede llegar a ser menor de los tres años previstos en la norma pero encontrarse aparejada con la procreación de hijos por el causante con su compañera, allí la operatividad del plus permite que el tiempo, aun siendo menor a los tres años, no dé al traste con el derecho de la compañera permanente a la pensión de sobrevivencia.

En suma, puede afirmarse sin hesitación alguna que de la lectura integral de la norma acusada, es claro que no le basta a quien pregone la calidad de compañera permanente, haber tenido un hijo en cualquier tiempo con el causante para convertirse en beneficiaria de la prestación, ya que precisamente la temporalidad descrita requiere, como excepción, a la falta de convivencia por espacio de tres años anteriores al fallecimiento, la procreación de hijos, que deberá entenderse lo fueron dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento y sin que aquí sea necesario que se haya convivido mínimo este tiempo. Este ejercicio interpretativo no parte de una interpretación literal o restringida, como quiera que debe tenerse en cuenta la finalidad de la prestación pensional en coherencia con el sistema jurídico.

Ahondando en mayores razones, véase como en el acápite final del texto analizado, se estableció: *«si en varias mujeres concurren estas circunstancias -refiere a la falta de viuda y la convivencia- sólo tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijos con el asegurado fallecido»*, de lo que necesariamente se debe colegir que la procreación de un hijo inclusive dentro de los 3 años anteriores sin que hubiera convivencia, en tratándose de varias compañeras, descarta la posibilidad de acceder y disfrutar la pensión de sobrevivientes.

Por tanto, la *«procreación de hijos»* por parte del causante con su compañera o compañeras permanentes viene a ser una especie de *«plus»* que unido o atado al requisito de la *«convivencia»* permite establecer, según cada caso, si hay lugar o no a ser acreedora del derecho pensional por muerte del asegurado. Por tanto, **deberán precisarse los criterios jurisprudenciales** que han tocado la materia sub-examine, verbigracia la sentencia **CSJ SL 10634, 17 jun. 1998**, para un adecuado entendimiento cuando ella señaló que *«la vocación como derecho habientes de las compañeras permanentes estaba condicionada a que faltara la viuda y a la vida marital con el causante durante los tres años anteriores a su deceso, requisito que no era menester acreditar si había hijos comunes entre los concubinas solteros», el eximente de acreditación que allí se alude, en verdad, refiere es al del término temporal -tres años- más no al de la vida marital -convivencia- con el causante.  
(...)*

Es así entonces, descendiendo al presente caso, **que el simple hecho de que el causante hubiera tenido hijos con la demandante no funda en ella el derecho a la prestación reclamada**, pues, **evidenciado e indiscutido el hecho de no haber convivido con el causante en los últimos tres años descarta en tales condiciones la concesión del pretendido derecho**. No se trata aquí de negar la prestación por razones meramente gramaticales, pues **al no discutirse la falta de convivencia entre la accionante y Jorge Salazar Zuluaga, mucho menos por el lapso indicado y con las características que la jurisprudencia del trabajo ha acogido** (CSJ SL2820-2021), entendiendo la familia a la luz de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-521-2007, como *«Aquella comunidad de personas emparentadas entre*

*sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos», no es dable cobijar la hermenéutica propuesta ante esta Corporación, pues se aleja de la legítima finalidad de la pensión de sobrevivientes, cual es la protección del núcleo familiar del asegurado o asegurada que fallece, que puede verse afectado por la ausencia de la contribución económica que proporcionaba, bajo el entendido de que la ayuda y soporte mutuo que está presente en la familia constituida por vínculos naturales o jurídicos, en todas sus modalidades se encuentra constitucionalmente protegida, como núcleo esencial de la sociedad (art. 42 de la CP). (negrilla intencional)*

A partir de las anteriores premisas, se efectuará el análisis, siendo claro que en este proceso no es objeto de discusión lo siguiente:

Ante el fallecimiento de JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA el **1 de abril de 1990<sup>6</sup>**, el **5 de junio de 1992** se presentó ante el I.S.S. a reclamar la pensión de sobrevivientes **ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ<sup>7</sup>**, en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores de edad: **KELI JOHANA ALVAREZ** que nació el **30 de junio de 1985<sup>8</sup>** y **YEISON DUBAN ALVAREZ** el **13 de junio de 1986<sup>9</sup>**: Para el momento de la muerte tenían, cuatro (4) y cinco (5) años de edad, respectivamente.

El I.S.S. con **Resolución 000776 de 1993** reconoció la pensión en valor equivalente a un salario mínimo legal, en un 50% para la **compañera** y el otro, distribuido entre **los dos hijos menores<sup>10</sup>**. Posteriormente, el I.S.S. emitió la **Resolución 8632 del 10 de agosto de 1994<sup>11</sup>** con la que decidió suspender la pensión a **ADRIANA MARIA** y al menor **YEISON DUBAN** por inconsistencias en el nombre del registro civil, argumentando en relación con la compañera, lo siguiente:

Que mediante investigación realizada por la División de Seguros Económicos en junio del presente año y recibida a través de oficio Nro.926215, el día 06 de julio de 1994, se pudo comprobar que el asegurado fallecido llevaba aproximadamente un año de separación de su compañera la señora **ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ**, por lo cual habrá de proceder a suspender la pensión que hasta la fecha venía disfrutando, toda vez que de conformidad con el artículo 30 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se incurrió en una de las causales de la pérdida y extinción del derecho a la pensión de sobrevivientes, el artículo dice:

**"Pérdida y extinción del derecho a la pensión de sobrevivientes:**  
Se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: 1º El cónyuge, cuando el cónyuge sobreviviente en el momento del deceso no hiciera vida en común con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía. En este evento el compañero o compañera permanente del causante no tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes."

<sup>6</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 página 29

<sup>7</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 página 29

<sup>8</sup> **ADRIANA MARIA** tenía **22 años** para la fecha de la muerte de su compañero, al haber nacido el 14 de diciembre de 19968 - Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 página 25

<sup>9</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 página 22

<sup>10</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 página 53

<sup>11</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 página 55- 58



Se hace referencia en el acto administrativo a una investigación realizada por la División de Seguros Económicos en junio de 1994 que **no fue allegada al proceso ni obra** en la carpeta administrativa<sup>12</sup>. Lo que se acredita es que en virtud de los recursos interpuestos por la señora **PINILLO RODRIGUEZ** el 9 de septiembre de 1994<sup>13</sup> la entidad emitió la **Resolución 0013804 del 30 de noviembre de 1994**<sup>14</sup> con la que decidió reponer parcialmente la Resolución 8632 del 10 de agosto anterior, disponiendo que a partir de diciembre de 1994 quedaría distribuida solo a favor de los dos hijos:

#### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** **REPONER** parcialmente la Resolución 008632 de agosto 10 de 1994, en el sentido de reconocer el derecho a pensión de sobrevivientes por muerte de origen no profesional del asegurado **JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA** que le asiste al menor **YEISON DUBAN ALVAREZ PINILLO**, representado legalmente por la señora **ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ** con C.C. 43.531.042 de Medellín, a partir de diciembre 10. de 1994.

Por lo tanto, a partir de diciembre 10. de 1994, la pensión de sobrevivientes por muerte del asegurado **JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA** reconocida mediante Resolución 000776 de marzo 12 de 1993, quedará distribuido así:

BENEFICIARIO	C. PENSION
KELY JOHANA ALVAREZ P.	\$49.350.
YEISON DUBAN ALVAREZ P.	\$49.350.

El **29 de septiembre de 2005**, la señora **PINILLO RODRIGUEZ** solicitó al I.S.S. se reanudara el pago de la pensión que inicialmente le había sido reconocida, afirmando en el escrito lo siguiente<sup>15</sup>:

**TERCERO:** Por espacio de seis años conviví bajo el mismo techo y lecho con el señor **ALVAREZ RUEDA**, sin que hubiera existido separación alguna, solo 8 días antes de su muerte me vi en la obligación de alejarme de la casa, por problemas con la madre de éste, pero en ningún momento se rompió el vínculo existente entre mi compañero y yo.

**CUARTO:** Por lo anterior, es que solicito se me reanude el pago de la pensión de sobrevivientes, porque fue por circunstancias ajenas a nosotros dos que me separé del señor **ALVAREZ RUEDA** 8 días antes de su muerte.

Y en atención al fallo de tutela proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín del 5 de abril de 2006, el I.S.S. emitió respuesta **el 7 de abril de 2006**<sup>16</sup>,

<sup>12</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 03 – **71673576 ISS-1** - página 61- 62

<sup>13</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 03

<sup>14</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 03 – **71673576 ISS-1** - página 38

<sup>15</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 03 – **71673576 ISS-1** - página 6-7

<sup>16</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 03 – **71673576 ISS-1** – página 27

oportunidad en la que nuevamente hace referencia a una investigación administrativa realizada por la entidad, de la que no existe prueba alguna en el proceso, referida a que no existía convivencia de la pareja para el momento de la muerte del causante por haberse presentado una separación durante el último año de vida del causante, por lo que no se cumplen las exigencias del artículo 55 de la Ley 90 de 1946 “ya que no se dio la convivencia en forma continua y permanente durante los tres años anteriores al deceso (...)”:

**Que de conformidad con la investigación administrativa realizada por el ISS, se pudo establecer fehacientemente la no-convivencia entre los señores JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA y ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ en forma continua y permanente para el momento del deceso de aquel, ya que durante el último año de vida del causante se encontraban separados.**

**Que de conformidad con el artículo 55 de la Ley 90 de 1946, establece lo siguiente: “... que a falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieran permanecido solteros durante el concubinato; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, solo tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijos del difunto.”. Subrayas fuera del texto.**

**Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se establece que la peticionaria ADRIANA MARIA PINILLOS RODRIGUEZ no reúne los requisitos exigidos en el acápite anterior para ser considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes; ya que no se dio la convivencia en forma continua y permanente durante los tres años anteriores al deceso del asegurado JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA.**

Pues bien, conforme el análisis efectuado en esta providencia sobre la interpretación del **artículo 55 de la Ley 90 de 1946**, las decisiones adoptadas por el I.S.S. al suspender el pago de la mesada pensional a la señora la señora **PINILLO RODRIGUEZ** con la **Resolución 8632 del 10 de agosto de 1994**, así como la de disponer el pago a partir del 1º de diciembre de 1994 solo para sus dos hijos menores de edad **Resolución 0013804 del 30 de noviembre de 1994** en manera alguna se encuentran ajustadas a derecho, verificándose en este caso concreto que si bien los dos hijos de la pareja no nacieron en los tres años anteriores al fallecimiento de JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA (entre el 1 de abril de 1987 y la misma fecha de 1990), para la época en que falleció su padre tenían tan solo cuatro (4) y cinco (5) años de edad.

Y se resalta que el proceder de la entidad se sustentó en una investigación administrativa de la que no existe prueba alguna y según la cual, la pareja se había separado el último año de vida, lo que tampoco se demostró en el proceso. Sobre la convivencia entre **JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA** y **ADRIANA MARIA PINILLO RODRIGUEZ** reposa la declaración realizada ante la Notaría Tercera de Medellín el **13 de febrero**

de 1991 por MARIELA TORO DE RAMIREZ y MARTA AURORA GÓMEZ DE PARRA quienes afirmaron bajo la gravedad de juramento:<sup>17</sup>

Que conocimos a Jorge Eliecer Alvarez Rueda quien falleció el día primero de Abril de 1.990. quien vivía en unión libre con la señora Adriana María Pinillo Rodríguez y de cuya unión procrearon dos hijos de nombre Kelly Yehanna y Yeisson Duban Alvarez Pinillo. Que el señor Jorge Eliecer veía económicamente por su compañera y sus dos hijos.  
Que tanto Jorge Eliecer como Adriana María son personas solteras. Que Adriana María no recibe ni esta pensionada por ninguna entidad.  
Para constancia firmamos hoy Febrero 13 de 1.991.

Sobre el valor probatorio de esta declaración debe decirse que en el Código General del Proceso en el **artículo 244** se dispone que es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, se presume auténtico mientras no haya sido tachado de falso o desconocido, según el caso; lo que se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. Ahora, frente al valor de las copias, el **artículo 246** del estatuto procesal indica que "Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo, por disposición legal sea necesaria la presentación de la original". Y frente al valor probatorio de documentos declarativos emanados de terceros, el **artículo 262** expresamente señala:

Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.

Baste resaltar que contrario al análisis efectuado por el A quo esta declaración otorga claridad respecto a que para el momento del fallecimiento de JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA vivía en unión libre con **ADRIANA MARIA PINILLO**; sin que fuese necesario la ratificación de lo narrado dentro del proceso. Sobre el particular, en la sentencia **SL 1227 – 2015** se reiteró sobre la no necesidad de ratificación de los testimonios extrajudiciales rendidos ante notario, salvo que la parte contraria lo requiera, lo dicho de tiempo atrás por la Alta Corporación y a partir de lo estatuido en la normativa anterior (Código de Procedimiento Civil:

"A juicio de la Sala, el razonamiento efectuado en la sentencia de 2 de marzo de 2007, radicación 27593, según el cual, las declaraciones extrajudiciales recibidas para fines no judiciales, pueden tomarse " (...) como **documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración**, según el artículo 277 del C. P. C. (Mod. Art. 27, Ley 794/2003), **no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite.**", está acorde con la **especial situación que se presenta en esta clase de procesos**, porque equiparar el documento simplemente declarativo emanado de un tercero, que no es elaborado ni suscrito ante un Notario, **con la declaración que ese mismo tercero realiza ante este**

<sup>17</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 página 59

**funcionario público, que cuenta con el atributo de ser depositario de la fe pública**, es perfectamente válido, en la medida en que, por lo menos, igual poder de convicción tienen estos dos medios de prueba, y no guardaría ninguna lógica, eximir de ratificación al primero, al paso que del segundo se exija el adelantamiento de tal formalidad dentro del proceso, siendo que, además, **las declaraciones extrajuicio fueron rendidas bajo la gravedad del juramento**.

" De lo que viene dicho, se concluye que no cometió el ad quem la distorsión jurídica que se le imputa, puesto que en los términos del artículo 27 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil: " Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación" , **que se acompasa con la política legislativa que en materia probatoria se viene adoptando, en perspectiva de menguar el exceso de rigor formal que antaño campeaba en los códigos de procedimiento**. No es sino leer el contenido del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, en esa misma dirección y con idéntica teleología, con la diferencia de que en ésta norma se explicitó que tales documentos eran emanados de terceros. (negrilla intencional)

De otro lado, las testigos del proceso también dan claridad respecto a la convivencia de la pareja para el momento de la muerte y que ésta había iniciado en **el año 1984**, demostrando con creces el requisito de haber hecho vida marital durante los 3 años anteriores a la muerte de su compañero:

**DOREIDY DEL SOCORRO ALVAREZ RUEDA**, hermana del fallecido, narra de manera espontánea:

**Indíquele al despacho si sabe el motivo por el cual fue convocada a declarar a este proceso:** No pues yo vengo pues a declarar que ADRIANA PINILLO vivía con mi hermano, tuvo dos hijos; **¿Cómo se llamaba su hermano?** JORGE ELIECER ÁLVAREZ RUEDA; **¿Dónde se conocieron ellos?** Ahí ellos vivían enseguida de la casa; **¿En qué año se conocieron ellos?** 84; **¿En qué época comenzaron a convivir?** Eh hh pues antes de los... ellos vivieron en el 84 se juntaron a vivir juntos, pero pues mucho antes se conocieron, pues ellos vivían enseguida de la casa muchos años y entonces ya empezaron con la relación en el 84 empezaron; **¿Dónde vivían ellos?** En Santo Domingo; **¿Esa casa era propia o arrendada?** Arrendada; **¿Usted me indica que ellos tuvieron hijos?** Si ellos tuvieron; **¿Cómo se llaman esos hijos?** JEISON y KELY; **¿Cuándo falleció su hermano?** En el 90; **¿Qué fecha específicamente?** Ahhh pues en el 90; **¿Principio de año, mediado de año, final de año?** Él fue en el abril; **¿Abril?** Abril del 90; **¿Cuándo el fallece a que se dedicada o que hacia él?** Él trabajaba en zapatería; **¿Cuándo el fallece donde vivía?** Santo Domingo; **¿Cuántos años vivieron allá en Santo Domingo?** Pues ellos dos vivieron 6 años; (...) **¿Cuándo murió JORGE ¿con quién vivía?** Con ADRIANA, la mamá de los niños; **¿En esos 6 años ellos se llegaron a separar?** No; **¿A qué se dedicaba ADRIANA para cuando falleció JORGE?** Ella era ama de casa; (...) **Doreidy, dígame al despacho durante el tiempo que estuvo su hermano con la señora ADRIANA MARIA PINILLO ¿hubo algún momento, alguna separación?** No; (...) **Durante el tiempo que vivía la señora ADRIANA MARIA y el señor JORGE ELIECER ¿quién era el encargado de pagar arriendo, alimentación, servicios públicos?** Mi hermano porque él era el que trabajaba, ella mantenía era cuidando los niños; **¿Cómo cambian las circunstancias de la señora ADRIANA y esos pequeños, cuando fallece su hermano?** Ah no, pues ella ya empezó a ver que hacía, laborar por ahí para poderse mantener. (...) **ADRIANA ¿vivía con quién?** En el 90, ah vivía con los hijos y mi hermano cuando lo mataron pues a él, cuando lo mataron a él vivía con él por allá en Santo Domingo; **Y luego que murió su hermano ¿dónde entró a vivir ADRIANA o con quien se quedó ADRIANA?** No, donde el pagaba arriendo, ella pagaba arriendo; **¿A qué hacía referencia usted cuando indica que ella vivía con la mamá?** No, pues pensé que pues



era antes pues de... **¿Antes de qué?** Antes de juntarse con mi hermano, pues él vivió 6 años con él, pues... en el 84 (...) **¿Usted sabe si él se llegó a asuntar por meses o semanas de la casa de doña ADRIANA?** Ah no, no él no, nunca.

**ALBA NIDIA ALVAREZ RUEDA**, hermana del causante también cuenta que su hermano JORGE ELIECER ALVAREZ RUEDA vivió 6 años con Adriana desde 1984 hasta 1990 cuando falleció, que en esa época vivía con la esposa y sus hijos que tenían 5 y 4 años, que la su compañera era ama de casa:

**Desde 1984 que usted dice, ellos convivieron ¿Ellos se llegaron a separar en esos 6 años?** No, ellos siempre estuvieron juntos; **¿Usted con qué frecuencia los visitaba?** Siempre íbamos mucho, pues ellos vivían por una heladería, nosotros íbamos mucho a esa heladería y por ahí derecho íbamos; **¿Usted sabe si Adriana reclamó pensión por la muerte de Jorge?** Unos días luego se lo quitaron, pues un tiempo no sé cuánto tiempo exactamente; **¿Sabe usted por que le quitaron esa pensión?** No, señor; (...) **Albia Nubia, dígame al despacho en el vecindario del señor Jorge ¿cómo presentaba a la señora ADRIANA MARIA?** Como su señora; **infórmele al despacho, ¿tuvo usted conocimiento que el señor JORGE se haya ausentado en los últimos años o en el último año del hogar que él conformaba con la señora ADRIANA?** No señor; **Cuéntele al despacho sabe usted ¿si la señora ADRIANA asistió a los ritos fúnebres del señor JORGE?** Sí; **¿A quién le daban las condolencias en esos ritos fúnebres?** A ella, a la esposa; **Infórmele al despacho, usted manifiesta que la pareja vivió en Santo Domingo ¿tiene usted conocimiento si tuvieron otro domicilio diferente del que tenía en Santo Domingo?** No, nunca salieron del barrio; **Tiene usted conocimiento ¿si el señor JORGE y la señora ADRIANA MARIA de la fecha del fallecimiento, en ese año anterior habían tenido alguna separación o se habían alejado?** En ningún momento (...) **¿Usted sabe si él realizaba viajes, se ausentaba de la ciudad por temporadas?** No, nunca; **¿Cuántos hijos el con doña ADRIANA?** Dos; **¿Usted sabe si doña ADRIANA realizaba viajes o se llegó a ir de la casa donde vivía con don JORGE?** No, señora; **¿Usted por qué le consta todo lo que nos está diciendo?** Porque vivíamos muy cerca y manteníamos mucho allá; **¿Mantenían mucho en dónde?** Pues o sea íbamos mucho a la casa de ella; **¿Y cómo era la casa de ella?** A ver era... una casa pues más bien humilde, como tenía normal su sala, sus piezas, su cocina; **¿Era primer piso, segundo piso?** Un primer piso.

Efectuando la valoración del acervo probatorio, a la luz de lo previsto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo** encuentra entonces esta corporación que en el proceso no se demostraron por la pasiva las razones que le llevaron a reconocer la pensión de sobrevivientes solo a los dos hijos menores de la pareja; siendo claro que la manifestación efectuada por la señora **PINILLO RODRIGUEZ** el **29 de septiembre de 2005**<sup>18</sup> cuando solicitó al I.S.S. que reanudara el pago de la pensión que inicialmente le había sido reconocida en manera alguna constituye una confesión en relación con que no existiese convivencia para el momento de la muerte<sup>19</sup>, pues si bien admitió el haberse alejado de la casa 8 días antes de la muerte por problemas con la madre del causante, en todo caso fue enfática en señalar que en ningún momento se rompió el

<sup>18</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 03 – **71673576 ISS-1** - página 6-7

<sup>19</sup> Carpeta PRIMERA INSTANCIA – archivo 03 – **71673576 ISS-1** - página 6-7



vínculo existente entre ellos, dado que tal separación se había presentado por causas ajenas a ellos.

La exigencia de la convivencia cuando se trata de cónyuges o compañeros (as) permanentes busca proteger la unidad familiar y por ello es entendida como la comunidad de vida, lazos de amor, ayuda mutua, solidaridad, apoyo económico, asistencia solidaria, acompañamiento espiritual, con vocación de consolidación de vida en pareja. Entonces, es aquella *«efectiva comunidad de vida, construida sobre una real convivencia de la pareja, basada en lazos de afecto y el ánimo de brindarse sostén y asistencia recíprocos»* (**sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 40055; reiterada en la CSJ SL4549-2019, CSJ SL3861-2020 y CSJ SL1130-2022**).

Incluso, bajo dicha perspectiva, el concepto analizado abarca circunstancias que van más allá del meramente económico, en la medida que protege el socorro en otras esferas, como se dijo, el familiar, vida en pareja, espiritual etc. Por tal razón, se ha defendido que, con independencia de la situación formal existente entre la pareja, lo que determina una real convivencia son las características anotadas. Por supuesto, tal elemento debe ser analizado en cada caso en concreto, ya que dadas las particularidades es posible que existan eventos en los que los cónyuges o compañeros permanentes no cohabiten bajo el mismo techo por circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, pues ello no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja, si claramente se mantienen vigentes los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente formal relativa a la cohabitación en el mismo techo (CSJ **SL6519-2017**, citada en **CSJ SL3861-2020 y SL 1399 de 2018** ). En la sentencia **CSJ SL14237-2015**, reiterada en **CSJ SL6519-2017 y CSJSL4962-2019**, la Corte sostuvo que:

Y es que, ciertamente, en sentencia CSJ SL, 10 may. 2007, rad. 30141, la Corte Suprema trajo a colación varios apartes jurisprudenciales de la noción de convivencia, recalcando que no es el simple hecho de la residencia en una misma casa lo que la configura, sino otras circunstancias que tienen que ver con la continuidad consciente del vínculo, el apoyo moral, material y efectivo y en general el acompañamiento espiritual permanente que den la plena sensación de que no ha sido la intención de los esposos finalizar por completo su unión matrimonial, sino que por situaciones ajenas a su voluntad que en muchos casos por solidaridad, familiaridad, hermandad y diferentes circunstancias de la vida, muy lejos de pretender una separación o ruptura de la pacífica cohabitación, hacen que, la unión física no pueda mantenerse dentro de un mismo lugar.

[...]

Y en sentencia del **15 de junio de 2006, radicación 27665**, reiteró la anterior orientación, estimando que era razonable «que en circunstancias especiales, como podrían ser motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor, etc., los cónyuges o

compañeros no puedan estar permanentemente juntos, bajo el mismo techo; sin que por ello pueda afirmarse que desaparece la comunidad de vida o vocación de convivencia entre ambos, máxime cuando, en el caso que nos ocupa, quedó demostrado que la demandante pasaba la noche cuidando la casa de una de sus hijas, pero en el día permanecía con su compañero».

Se trae a colación lo anterior, para precisar y reiterar que la convivencia entre esposos o compañeros permanentes puede verse afectada en la unión física, es decir, por no convivir bajo un mismo techo, por circunstancias que la justifiquen pero que no den a entender que el vínculo matrimonial o de hecho ha finalizado definitivamente." Negrilla intencional

Es el conjunto de consideraciones precedente el que llevará a la Sala a **REVOCAR** la decisión que se revisa para en su lugar **CONDENAR** a **COLPENSIONES** al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a sus hijos **KELI JOHANA** y **YEISON DUBAN ALVAREZ** como herederos determinados y a los indeterminados, bajo los siguientes parámetros:

- En primer lugar, el valor de la mesada es el equivalente al **salario mínimo legal** y ante la fecha de causación del derecho, son **14 mesadas año**, con las adicionales de junio y diciembre.
- Se alegó por COLPENSIONES y por la Procuradora Judicial la excepción de prescripción de mesadas, lo que en efecto sucedió, en los términos de los **artículos 151 y 6** del Código Procesal del Trabajo; porque si bien la entidad inició el reconocimiento solo a favor de los hijos a partir de diciembre de 1994, excluyéndola, lo cierto es que sólo reclamó el que se reanudara el pago de la mesada a su favor el **29 de septiembre de 2005**. Ahora, si bien la entidad contestó negativamente desde el **7 de abril de 2006**, lo cierto es que la demanda sólo se instauró el **28 de octubre de 2015**, prescribiendo las mesadas causadas antes del **28 de octubre de 2012**: Para ese momento los hijos KELI JOHANA y YEISON DUBAN ALVAREZ han superado los 25 años de edad.
- Habiéndose acreditado el fallecimiento de ADRIANA MARIA para el **1 de mayo de 2017**, el valor del retroactivo causado asciende a la suma de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$40.206.837)** de acuerdo con el siguiente detalle:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2012	2,44%	3,006	\$ 566.700	\$ 1.703.500
2013	1,94%	14	\$ 589.500	\$ 8.253.000
2014	3,66%	14	\$ 616.000	\$ 8.624.000
2015	6,77%	14	\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	4,003	\$ 737.717	\$ 2.953.081
			TOTAL	\$ 40.206.837

## 6. PRETENSIÓN ACCESORIA

No se condenará al reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque la pensión se causó con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Se condenará sí a la INDEXACIÓN porque las mesadas se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda, derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que esta condena no implica el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el **artículo 16 de la Ley 446 de 1998** según el cual *«dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales»*. Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda **(SL 359 -2021)**.

La indexación del retroactivo ordenado se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

**ÍNDICE FINAL** correspondiente al IPC para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

**ÍNDICE INICIAL** correspondiente al IPC para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada**

**VALOR A INDEXAR** que se refiere al **monto de cada mensualidad**

## 7. LA CONDENA EN COSTAS

Al prosperar el recurso de apelación y revocarse la sentencia en su integridad se condenará en costas a COLPENSIONES en las dos instancias de conformidad con el mandato del artículo 365 del CGP. Las agencias en derecho en segunda ascienden a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2023.

## 8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, DECIDE:

**REVOCAR** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar:

**PRIMERO: DECLARAR** que **KELI JOHANA** y **YEISON DUBAN ALVAREZ** como herederos determinados y los indeterminados de **ADRIANA MARÍA PINILLO RODRIGUEZ** tienen derecho al reconocimiento y pago del retroactivo de la PENSION DE SOBREVIVIENTES como compañera permanente del causante JORGE ELIECER ÁLVAREZ RUEDA, quien falleció el **1 de abril de 1990**.

**SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES** a reconocer y pagar a **KELI JOHANA** y **YEISON DUBAN ALVAREZ** como herederos determinados y a los indeterminados de **ADRIANA** la suma de **CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$40.206.837)** por concepto de retroactivo pensional causado entre el **28 de octubre de 2012** y el **1 de mayo de 2017**, mesadas que deberán ser indexadas de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

**ÍNDICE FINAL** correspondiente al **IPC** para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

**ÍNDICE INICIAL** correspondiente al **IPC** para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada**

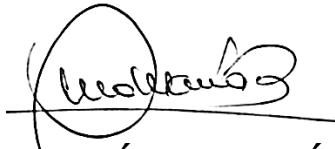
**VALOR A INDEXAR** que se refiere al **monto de cada mensualidad**

**TERCERO:** Se declara probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta y las demás resultan resueltas de manera implícita con la decisión.

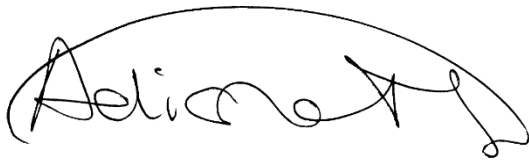
**CUARTO:** Costas en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES. Se fijan como agencias en derecho en esta instancia una suma equivalente a dos **(2) s.m.l.m.v para el año 2023**.

Lo anterior se notifica por EDICTO, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

**Las Magistradas,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**